
La gestión de los fondos de la UE tensa la estructura del Ejecutivo

POLÍTICA / P. 18

Los fondos europeos someterán al Estado a una prueba de solvencia

La gestión de 140.000 millones exigirá una transformación de la Administración



El jefe de gabinete de Presidencia, Iván Redondo, es el encargado de crear y dirigir el equipo que coordinará las inversiones

PEDRO VALLÍN
Madrid

Gastar no es fácil. Inyectar 140.000 millones de euros en la economía productiva se dice más fácil que se hace. Esta gestión va a ser un verdadero test de estrés para la Administración del Estado y no son pocos los que creen que es la ocasión de remozar de arriba a abajo su estructura funcional. Hay mucho dinero, poco tiempo y una muchedumbre de proyectos que poner en marcha, debido a la atomización productiva y a la complejidad de un Estado con tres niveles administrativos. Cuatro, con las diputaciones. Y no es un desafío político sino organizativo, un reto que puede renovar la faz del diseño decimonónico del aparato estatal español o hacerlo naufragar en el burocratismo y la inercia.

Hay inquietud en las tripas del Leviatán. Al menos, entre los más veteranos de la función pública, que anticipan una carga de trabajo sin precedentes que pondrá a prueba las capacidades del vetusto Estado y la coordinación entre administraciones. La experiencia con los fondos de cohesión europeos que regaron España en los noventa es razonablemente satisfactoria, pero su gestión, recuerdan en el Ministerio de Economía, se sustentaba en grandes contratos de infraestructuras, mientras que el tejido productivo que ahora hay que volver verde y digital –tales son las dos condiciones que impone Bruselas al uso de los fondos del programa Next Generation EU– está fragmentado en una miríada de pymes que debe ser entretendida en un tapiz estratégico que satisfaga la ambición de modernización del modelo productivo.

No alienta al optimismo –y algu-

nos medios han puesto el acento crítico en ello– la capacidad previa de ejecución presupuestaria de España, que cifran en el 34% para el periodo 2014-2020, si bien desde el Gobierno aseguran que estos datos son un hito temporal puntual, y que España jamás ha tenido que devolver un euro a Bruselas por no haber sido capaz de ejecutar las ayudas.

Ahora, para asegurar la diligencia de los procesos El ejecutivo prevé que lideren la gestión de los 140.000 millones el presidente, Pedro Sánchez, y en su equipo. Y para ello en la Moncloa se están preparando grupos de trabajo específicos bajo la dirección del jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, con el soporte jurídico del equipo de Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia. Hay confianza pero también vértigo.

La alianza de Sanidad y Defensa

■ Desde Economía y Transformación Digital hasta Derechos Sociales y Agenda 2030, Seguridad Social e Inclusión, Hacienda, Sanidad, Trabajo o Función Pública, todos los departamentos admiten cierta envidia del Ministerio de Defensa, por su capacidad ejecutiva. En las semanas más duras del confinamiento, todos echaron mano del único ministerio que, por su naturaleza, puede afrontar cualquier cometido –de montar un hospital a desinfectar residencias– sin las tediosas necesidades de la burocracia y la coor-

dinación administrativa. A su lado, Sanidad, colocado en el vértice del mando único del estado de alarma, padeció la insuficiencia de sus equipos. Menguado por la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas, se encontró de súbito infradotado de recursos para la exigente coordinación del control de la pandemia. Esto abrió en julio un debate en el Ejecutivo sobre una profunda reforma de su diseño administrativo que permita una coordinación privilegiada entre los recursos de Sanidad y Defensa.

LAS CLAVES

1 El Gobierno deberá gestionar en tiempo récord el más ambicioso plan de inversiones productivas que ha conocido la administración del Estado, una movilización de recursos y procedimientos sin precedentes para inyectar 140.000 millones en la economía productiva.

2 La exigencia de Bruselas de un único plan para cada país ha hecho que Pedro Sánchez haya centralizado la coordinación en la Moncloa, que se está reforzando para crear equipos específicos para la gestión de proyectos. La idea de Sánchez es hacer responsables a las comunidades autónomas del diseño de los planes de inversión, de modo que la ocasión sirva para profundizar una estructura de gestión de tipo

federal y sirva para simplificar y agilizar todos los procedimientos.

3 Los cargos políticos, así como los más veteranos en la función pública, advierten de la envergadura de una gestión que pondrá a prueba la diligencia burocrática y también las capacidades de una Administración menguada en las últimas décadas por la progresiva transferencia de competencias a las comunidades –caso del Ministerio de Sanidad– y una década de recortes.

4 Las medidas sanitarias, sociales y económicas para paliar los efectos de la pandemia vienen revelando desde marzo insuficiencias de recursos en algunos departamentos de la Administración. Trabajo y

Seguridad Social sufrieron un cuello de botella en la gestión de los ERTe y las ayudas a autónomos que se prolongó hasta junio. El servicio público de empleo (SEPE) dispone hoy de una plantilla un 20% inferior a la de hace veinte años. La Seguridad Social, por su parte, admite que su plantilla está muy envejecida en relación con la de las consejerías de las comunidades autónomas.

5 Los más optimistas aseguran que dar curso a las inversiones del plan Next Generation EU deberá permitir no solo la digitalización del sector público, sino también la transformación de la estructura administrativa de Estado e incluso de su operativa territorial.

La pandemia y cuanto la rodea se están siendo un formidable examen para el Estado en términos estructurales pero también, un inmejorable instrumento de diagnóstico para su puesta al día. Así ha sido desde marzo con lo urgente, y promete seguir siéndolo durante los próximos ejercicios con lo importante. Ayer, en estas mismas páginas, Ignacio Sánchez Cuenca era taxativo sobre el rendimiento demostrado por el aparato público: “Ni hay recursos económicos, ni hay personal, ni hay organización”. En los ministerios, en cambio, la impresión es menos pesimista. Los bastidores de Trabajo y Seguridad Social emitieron audibles crujidos entre marzo y junio para sacar adelante los ERTe de 3,5 millones de trabajadores y tramitar el casi millón de solicitudes de autónomos que se acogieron a los cuidados paliativos ofrecidos por el Gobierno. Hubo cuellos de botella, pe-

LA MONCLOA CRECE

Presidencia coordinará con las comunidades ante Bruselas todo el plan de inversiones

MEDIDAS PALIATIVAS

ERTE e ingreso mínimo han revelado cuellos de botella en Trabajo y la Seguridad Social

ro en los ministerios concernidos los equipos están razonablemente orgullosos de la gestión. Las plantillas trabajaron al 100% pese al confinamiento, y el Ministerio de Función Pública habilitó la posibilidad de que funcionarios de otros departamentos reforzaran esos equipos.

Las miradas de impaciencia se han vuelto de nuevo sobre esas capacidades con el ingreso mínimo vital, una medida diseñada para ser sencilla e inmediata para los solicitantes pero cuya gestión, que exige coordinarse con las autonomías, está siendo desesperante en un momento en que ni la economía ni el humor están para dilaciones.

El “refuerzo de lo público” es uno de los eslóganes del Gobierno de coalición, así que cabe suponer que habrá una generosa oferta pública de empleo acompañando a los presupuestos generales del Estado, vistas las insuficiencias detectadas en tantos ministerios. En todo caso, la propia exigencia de modernización económica de Bruselas implica avances en términos de digitalización administrativa, una cuestión delicada, recuerdan en la Seguridad Social, pues ha de sincronizarse con la capacitación digital de los ciudadanos, a riesgo de obliterar a la parte más vulnerable de la población.

El desafío es único y afecta a la administración vertical y horizontalmente, a todos los departamentos y niveles, pero en el Gobierno confían en que sea la palanca de la mayor transformación del Estado de los últimos doscientos años. Debería contribuir el hecho de que Bruselas exige al país un único plan, para el que Sánchez ha llamado a la corresponsabilidad de las comunidades autónomas, merced a nuevos mecanismos de coordinación y procedimientos que, a la postre, deberían profundizar en la federalización del funcionamiento del país. Un proceso que, en el escenario más virtuoso, debería funcionar al margen de los objetivos políticos y que, eso sí, pondrá los pelos de punta a los partidarios de la aminoración del Estado. ●